

En América Latina existe una tensión entre el régimen democrático que tiende a incluir a la gente y el sistema económico que la excluye. Se ha demostrado que la relación entre crecimiento e igualdad es mucho más débil que la que existe entre educación e igualdad

y, paradójicamente, hay mucho dinero sin tareas. También ocurre que en América Latina existe una tensión entre el régimen democrático que tiende a incluir a la gente y el sistema económico que la excluye. Se ha demostrado que la relación entre crecimiento e igualdad es mucho más débil que la que existe entre educación e igualdad, esto es, no necesariamente los esfuerzos orientados hacia el mayor desarrollo productivo reducen la desigualdad, como sí lo consigue una mayor inversión en educación.

Mientras no se reforme el modelo regional para hacerlo más competitivo en términos internacionales y más equitativo en términos regionales y nacionales, la globalización seguirá teniendo efectos perjudiciales en la gobernabilidad política. En Colombia, Perú y México han surgido movimientos guerrilleros de mayor o menor importancia que están en contra del sistema político y económico, como sucedió en Centroamérica en los ochenta. Éstos alimentan los factores proclives a la ingobernabilidad, cuestionan la legitimidad del Estado y pretenden

cambiar el sistema social y político por otro de anacrónica inspiración comunista. Los movimientos populares motivaron la renuncia de los presidentes de Ecuador y de Perú, lo cual entrañó un largo proceso de reorganización institucional en ambos países. Recientemente en Argentina la alianza política gobernante sufrió un revés al renunciar el vicepresidente de la república, miembro del Frepaso (Frente País Solidario), en medio de una severa crisis económica que explica los cambios recientes de tres secretarios de Hacienda en el período de un mes.

El narcotráfico es uno de los factores más perturbadores de la gobernabilidad latinoamericana contemporánea por medio de sus distintas fases de cultivos ilícitos, procesamiento industrial de alcaloides, distribución y consumo de drogas y lavado de dólares y activos. A lo largo de esta siniestra cadena se generan múltiples situaciones de criminalidad y corrupción que afectan seriamente la estabilidad institucional y política de los países del área y, por supuesto, de las naciones consumidoras, en particular de Estados Unidos y los países de Europa y Asia. El narcotráfico se ha vinculado en algunos casos a movimientos guerrilleros. En paralelo ha surgido el paramilitarismo como una fuerza de contención a la guerrilla, financiado por empresarios y por narcotraficantes. Se ha creado una perversión narcoguerrillera. Desde la óptica política es un fenómeno lamentable. Si la función principal del Estado es la retribución institucionalizada y general de certidumbre, el narcotráfico se encarga de afectar la seguridad de los habitantes. Crea una situación de desintegración de las normas que aseguran el orden social. Erosiona, por tanto, la capacidad del Estado de funcionar con sus instituciones.

ESCENARIO ECONÓMICO Y SOCIAL

En 2000 continuó la recuperación de las economías latinoamericanas y del Caribe iniciada en el último trimestre de 1998. El PIB regional aumentó 4% tras el virtual estancamiento del año anterior. El motor principal de la recuperación fue el auge de las exportaciones, ya que la demanda interna fue menos dinámica que lo esperado. En parte por eso el mayor crecimiento no se reflejó en una baja sensible del desempleo, cuya tasa se mantuvo cercana a 9%, mientras los salarios reales apenas subían.

El auge de las exportaciones permitió el déficit regional de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual, expresado como porcentaje del PIB, pasó de 3.1 a 2.5 por ciento. En ello desempeñó un papel primordial el entorno externo, en particular el dinamismo de la economía estadounidense, el crecimiento acelerado del comercio intrarregional y el mejoramiento de los precios de muchos productos básicos. Ello en contrapunto con la alta volatilidad de los mercados financieros propagada por los altibajos en los bolsas de valores de Estados Unidos. Sin embargo, el déficit de la cuenta corriente se pudo financiar con las entradas de capital, gracias principalmente a la inversión extranjera directa.

La inflación mantuvo la tendencia favorable de los previos cuatro años: bajó hasta 9% en promedio, mientras cuatro quintas

partes de los países registraban incrementos de un dígito. Este resultado se logró pese al alza de los precios del petróleo y la reactivación productiva. La mayor flexibilidad de la política monetaria se reflejó en una recuperación de la oferta monetaria y en una baja de las tasas de interés. En cambio, la política fiscal fue menos rigurosa, si bien los déficits fiscales se contrajeron de manera considerable.

Comportamiento del PIB regional

Dado el tamaño de sus economías, la fuerte expansión de México y el crecimiento moderado de Brasil explican en buena medida la reactivación de la economía de la zona, ya que los restantes países en conjunto sólo crecieron 2.2%. Al contrario del año previo, hubo menos diferencias en el comportamiento de los países del norte y del sur de la región, aunque en el primer grupo se encuentran todavía las dos economías más dinámicas. La República Dominicana tuvo un crecimiento muy elevado (8.5%), el más alto de la región, prosiguiendo con la vigorosa tendencia expansiva observada a lo largo del decenio de los noventa. México mostró una gran expansión (7%), con lo que afianzó el ritmo de crecimiento que registra desde 1996 gracias a sus exportaciones al mercado de Estados Unidos. Destacó también el buen crecimiento de Nicaragua, así como la recuperación de Honduras, cuyo nivel de actividad en 1999 sufrió una fuerte caída debido a las secuelas del huracán Mitch. Los otros países de Centroamérica y el Caribe mostraron incrementos más moderados.

En los países sudamericanos el nivel de actividad se recuperó, ya que de un descenso de casi 1% en 1999 se pasó a un incremento de 3% en 2000. Brasil creció 4%, destacando la reactivación de la industria manufacturera, que en los años anteriores había tenido una evolución adversa. En Colombia, Ecuador y Venezuela, el PIB se recuperó después del retroceso sufrido en 1999, pero sin alcanzar incrementos de magnitud, mientras que en Chile el vuelco favorable fue particularmente significativo. El estancamiento de Argentina obedeció a las alzas reducidas del consumo, el volumen y el precio de las exportaciones; esa economía registró una nueva caída de la inversión y la alta tasa de desempleo persistió. La disminución de la actividad económica en Uruguay obedeció a un entorno externo adverso.

Condiciones macroeconómicas

La política macroeconómica regional ha surgido de los dos últimos años de crisis con cambios cualitativos, en especial en los países que adoptaron un modelo de tipo de cambio flotante, lo que les abrió espacio para responder de manera más pragmática a la evolución de la coyuntura. Los factores determinantes de este cambio han sido el descenso de la inflación de la región y la mayor credibilidad que las autoridades responsables de la política macroeconómica lograron respecto

a la consolidación de la estabilidad interna (inflación y déficit fiscal).

La mayoría de los países que registraron una fuerte desaceleración de su actividad económica durante el año anterior enmarcó su política macroeconómica de 2000 en un triángulo definido de la siguiente manera: a) la voluntad de reducir los mayores déficits fiscales heredados del años anterior; b) el deseo de flexibilizar la política monetaria para complementar la reactivación de la actividad económica, sin sacrificar la estabilidad de precios, y c) la necesidad de responder a los vaivenes de los mercados financieros internacionales. Este marco, de por sí complejo, se vio dificultado por el notable aumento de precios de los combustibles y sus repercusiones en la inflación.

Un mejor ambiente económico y un tono más austero de la política fiscal ayudaron a la región a reducir su déficit fiscal promedio a 2.3% del PIB, después de haber alcanzado en 1999 el nivel más alto de los últimos diez años: encima de 3%. Elementos exógenos, como la mejoría del precio del petróleo y el mayor dinamismo de las economías, coadyuvaron a las políticas de ajuste que los gobiernos emprendieron para superar la brecha fiscal.

La tendencia a cierta normalización de los mercados financieros internacionales que se percibía desde finales de 1999 permitió apoyar una política monetaria menos austera en los países que habían sufrido una recesión el año anterior y deseaban complementar la reactivación con un nivel adecuado de liquidez. Esa situación se dio en un grupo importante de países, entre los cuales sobresale Brasil, donde el aumento de la liquidez se relacionó estrechamente con la recuperación económica y el aumento de la inversión y el consumo.

En otros países, la capacidad de flexibilizar la oferta monetaria siguió condicionada en buena medida a la situación de liquidez externa. En Venezuela, el rápido aumento de las reservas obligó, incluso, a tomar medidas para frenar la fuerte expansión de la liquidez. México constituyó un caso distinto, dado que la política monetaria tuvo que adoptar un carácter progresivamente más restrictivo para evitar el sobrecalentamiento de la economía y la fuga de capitales. Los países que se seguían enfrentando a fuertes restricciones externas no pudieron suavizar su política monetaria. Éste fue en particular el caso de Argentina, debido a su régimen cambiario.

Como reflejo de los cambios en la política monetaria, la tasa de interés real se redujo en muchos países, continuando con la tendencia advertida desde el segundo semestre de 1999. La disminución de las tasas fue de poco menos de 2% en promedio, tanto en la captación (tasas pasivas) como en el financiamiento (tasas activas). Por tanto, el margen de intermediación, que se había ampliado de modo considerable durante 1998 y 1999, no mostró variaciones, excepto en Brasil y Colombia, donde bajó de manera significativa: 9 y 7 puntos respectivamente, en las tasas pasivas, y mucho más en las activas.

Empero, lo anterior no se tradujo en una reactivación de crédito. En ello influyeron una caída de la demanda de financiamiento por parte del sector público, debida a la reducción de su déficit fiscal, y también la atonía de la inversión interna, tanto

de empresas como de particulares, sobre todo en la industria de la construcción.

Con la recuperación de la actividad económica, las privatizaciones recobraron el impulso que tenían antes de la crisis. Los ingresos recaudados en la región por este concepto superaron los 15 000 millones de dólares, unos 3 000 millones más que el año anterior. La situación de los países volvió, sin embargo, a ser muy heterogénea, ya que 80% de la cifra corresponde a Brasil. De nuevo las transnacionales europeas, sobre todo españolas, desempeñaron un papel importante.

Los países en los que el proceso de privatización se había estancado por varios años (Ecuador y Paraguay) adoptaron en 2000 leyes que permitirán un rápido avance en el futuro. También destaca la mayor relevancia que han adquirido las concesiones a particulares, en una situación en que los activos estatales privatizados son cada vez más escasos, mientras las necesidades de inversión en infraestructura siguen siendo muy altas.

En el ambiente comercial, el uso de medidas proteccionistas disminuyó y se prosiguió con el paulatino descenso de las tasas arancelarias estipulado en los acuerdos subregionales. En el seno del Mercosur empezó un proceso destinado a fomentar la coordinación macroeconómica con objeto de fortalecer la integración regional y disminuir la vulnerabilidad de los países miembro frente a los vaivenes del mercado internacional. Proliferaron los acuerdos bilaterales, actividad especialmente intensa por parte de México. También cabe subrayar la decisión adoptada en la Reunión de Presidentes de América del Sur de culminar en este año las negociaciones entre el Mercosur y la Comunidad Andina con el fin de crear una zona de libre comercio sudamericano.

Mientras varios países continuaron sus esfuerzos destinados a fortalecer los sistemas financieros (Colombia, Ecuador, México), a fines de año otros aún registraban crisis financieras graves (Nicaragua, Perú). Chile dio un paso más en el proceso de desregulación de su mercado de capitales, al eliminar el requisito de permanencia mínima de un año aplicado a las inversiones externas y la abolición del impuesto sobre las ganancias de capital de los no residentes. Costa Rica y Nicaragua adoptaron leyes con fines de modernización del sistema de pensiones fortaleciendo su posición financiera. Argentina y Ecuador, en tanto, emprendieron medidas para flexibilizar sus mercados de trabajo y reducir los costos laborales.

Entorno externo

El valor de las exportaciones creció más de 20% durante 2000 (17% si se excluye Venezuela), el ritmo más alto del último lustro. Todos los países, salvo Costa Rica, Haití y Paraguay, registraron incrementos y éstos fueron casi siempre de dos dígitos. Destacan Venezuela con alzas de 60% y México de más de 20 por ciento.

En general, los incrementos de la exportación se debieron a una combinación de mayores volúmenes (11% en el conjunto de la región) y mejores precios (más de 8%), aunque obviamente

hubo diferencias importantes que reflejan las variadas influencias que se hicieron sentir en las distintas economías. Aparte de factores específicos de cada una de ellas, los principales se vinculan con las condiciones de la demanda externa.

En primer lugar, los valores de las exportaciones aumentaron, aunque con muchas excepciones, lo que reflejó la evolución desigual de los precios de los productos exportados por los distintos países.

Debido a la mayor demanda y la política de limitación de oferta aplicada por la OPEO, en los 11 primeros meses del año el precio promedio de los crudos exportados por la Organización fue cerca de 60% superior al promedio de 1999. Todos los países exportadores de petróleo de la región registraron alzas de sus valores de exportación. Tal fue el caso de Venezuela, México, Colombia y Ecuador.

La reactivación en América Latina y el Caribe estimuló los intercambios intrarregionales, que recuperaron el dinamismo perdido en los años anteriores. Asociado a la reactivación económica, se dinamizaron las importaciones, que aumentaron en casi todos los países. En la región en su conjunto el crecimiento fue superior a 17% debido a la expansión de los volúmenes importados (12%) y el alza de los precios (casi 5%).

Los volúmenes importados por los países reflejan la evolución del nivel de actividad económica de éstos y en algunos casos el dinamismo de las actividades maquiladoras que entraña la importación de componentes. Por ello, los mayores aumentos correspondieron a México (21%), Venezuela (30%) y la República Dominicana (14%).

Después de la crisis iniciada en Asia en 1997 y tras la moratoria rusa de agosto de 1998, América Latina y el Caribe prosiguieron un ciclo de concentración del financiamiento externo en el que persistieron episodios de volatilidad asociados a la evolución de los mercados financieros internacionales, sobre todo de Estados Unidos.

En un año caracterizado por una menor liquidez en los mercados internacionales, el ingreso de capitales a la región ascendió a 52 000 millones de dólares. Pese a que este monto es más alto que los 40 000 millones de 1999, siguió siendo muy inferior a las entradas de 70 000 millones de 1998 y de 85 000 millones de 1997. El flujo más dinámico fue de nueva cuenta la inversión extranjera directa, puesto que, en promedio, los demás capitales registraron salidas. La afluencia de recursos de inversión extranjera directa fue especialmente cuantiosa en Brasil y México y algunas economías de menor tamaño, como Bolivia, Ecuador y la República Dominicana. En contraste, los flujos netos destinados a Argentina y Perú sufrieron una apreciable disminución y en Chile se tornaron negativos.

En 2000 el saldo de la deuda externa desembolsada de América Latina y el Caribe ascendió a más de 750 000 millones de dólares, mostrando una reducción por primera vez desde 1988. En la mayoría de los países los montos de la deuda externa tuvieron pocas variaciones. Entre los que mostraron una reducción se puede mencionar a Brasil, que en abril efectuó un pago extraordinario al FMI; México, que continuó desarrollando una política para mejorar el perfil de la deuda, y Ecuador y Hon-



En América Latina se vive un conflicto permanente resultado de la confrontación de las necesidades de solución a los problemas sociales de desempleo, pobreza, exclusión, inseguridad, y las ofertas reales de gobierno. Esto se ahonda por el entusiasmo que genera la alternancia en el poder de diversos partidos políticos, los gobiernos de coalición que surgen y la mejoría considerable de los instrumentos electorales

duras, que la redujeron merced a operaciones de reestructuración. Gracias a esa evolución y, además, a la expansión de las ventas externas, los coeficientes entre la deuda externa y las exportaciones de bienes y servicios mejoraron de manera generalizada en 2000. El coeficiente regional disminuyó a cerca de 180%, frente a 217% en 1999. Sin embargo, varios países siguieron presentando indicadores de alto endeudamiento. La relación entre los intereses pagados y las ventas externas disminuyó levemente.

El desempeño interno

El ahorro y la inversión mostraron un incremento. El nivel de inversión en 2000 fue de 21.8% del PIB, 4.2% superior al nivel de 1999. Los países que estuvieron por encima de este promedio general fueron Colombia, Honduras, México y la República Dominicana. El crecimiento económico de este grupo se ubica en promedio sobre 6% en 2000 y a la continuación de la expansión siguió un aumento de la inversión.

La inflación, por su parte, se mantuvo en un bajo nivel. En 2000 la tasa regional de inflación promedio fue de 9%, ligeramente inferior a los tres años previos. A esto se suma que 17 de los 22 países considerados registraron una inflación de un solo dígito y en la mayoría de ellos el ritmo de incremento de los precios declinó o se mantuvo bajo. Sólo en Ecuador, debido al desborde de los precios en los primeros meses del año, la inflación se aceleró de manera notable: pasó de 60% en 1999 a 97% en 2000.

La recuperación del crecimiento económico regional no incidió en una marcada mejoría de las variables laborales. La tasa

de empleo mostró un leve aumento en sólo un grupo de 10 países. Como la reactivación económica fue acompañada de un incremento de la oferta laboral, el desempleo prácticamente no cedió y se mantuvo en un nivel alto, calculado en 8.6% para 2000, frente a 8.7% en 1999, esto es, elevado en términos históricos.

En congruencia con el bajo dinamismo de la generación regional de empleo, en la mayoría de los países los salarios medios reales tampoco mejoraron de modo significativo, aunque en algunos casos los avances en la reducción de la inflación y los incrementos de productividad favorecieron a las remuneraciones. De esta manera, el promedio de 10 países que disponen de información sobre la evolución de los salarios reales en el sector formal subió apenas 1.5 por ciento.

El magro desempeño de la región en términos de empleo y salarios oculta el comportamiento heterogéneo de las economías. Al respecto se pueden distinguir tres grupos. El primero está formado por países donde un crecimiento relativamente elevado tuvo efectos muy favorables en los indicadores laborales. Sobresalen de este grupo México, Brasil, Nicaragua y la República Dominicana. El segundo grupo abarca una serie de países que mejoró su desempeño macroeconómico respecto de 1999, sin que ello tuviera un marcado efecto positivo en el empleo y el desempleo (destacan Chile y Venezuela). La explicación se encuentra en que el crecimiento económico se concentró en sectores con poca intensidad de mano de obra. El tercer grupo incluye economías con un débil crecimiento económico que incidió en una baja de la tasa de ocupación y aumento de la tasa de desempleo, así como en un estancamiento de los salarios. A este grupo pertenecen Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

PERSPECTIVAS

Las proyecciones para el presente año indican una baja en el crecimiento del PIB regional en relación con 2000 y se sitúan alrededor de 3 a 3.5 por ciento. Entre los países de mayor tamaño, México registrará un menor crecimiento que en 2000 en la medida en que la economía de Estados Unidos siga su desaceleración; Brasil podría registrar un leve incremento.

Un comentario específico requieren los tres países de mayor tamaño de América Latina. México deberá desacelerarse a una tasa de 3.5% a diferencia de 7% de crecimiento en 2000. Brasil es quizá el único país que contará con una base para amortizar los efectos de las turbulencias externas, debido a que la mayoría de los capitales que atrajo en los últimos años constituyen inversión directa. Se calcula un crecimiento para este año de 4.5% y una inflación de 4 a 4.5 por ciento, en virtud de la relativa solidez lograda en 2000, cuando creció 4%. Sin embargo, debe fortalecer su balanza comercial para tener un equilibrio macroeconómico estable.

En 2000 Argentina tuvo un desempeño de cero en términos de crecimiento y no logrará salir de la crisis debido a la dependencia de sus ventas de granos y carnes, cuyos precios se han deteriorado. En paralelo, el gobierno argentino acaba de lanzar un conjunto de medidas de carácter restrictivo con el fin de sanear su economía, entre las que destacan la desregularización de obras sociales, recortes al presupuesto de 2001 y un pacto con los gobernadores provinciales para congelar el aumento del gasto hasta 2005.

Con todo, independientemente de esta perspectiva para el corto plazo, América Latina se enfrenta a problemas de mayor profundidad y que tanto los gobiernos como sus sociedades tienen que resolver para poder tener gobernabilidad democrática y un desarrollo económico y social cualitativamente mejor. En seguida se destacan los principales.

Relación de América Latina con Estados Unidos. Es preciso abatir la dependencia para evitar que las fases descendentes de la economía estadounidense afecten de manera profunda a la región. Esto significa orientar el comercio y atraer inversiones de Europa y Asia a fin de lograr un mejor equilibrio por regiones de las actividades económicas, aunque este objetivo se cumpla en el largo plazo.

El crecimiento demográfico aún es alto. A pesar de avances notables, todavía se registran niveles altos que se traducen en el aumento de la fuerza laboral por encima de las necesidades de empleo. Asimismo, se ha presentado una emigración excesiva del campo a las ciudades.

En 2025 habrá 700 millones de latinoamericanos y una enorme burbuja de juventud en las tuberías demográficas que exigirá servicios de salud, educación y empleo. También habrá 180 millones de latinoamericanos en la tercera edad, que obliga a desarrollar una política de atención basada en un régimen pensional sustentable y un sistema de salud adecuado a sus necesidades. Ello significa que es preciso retomar con mayor vigor una política que induzca un crecimiento demográfico menor.

América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo en desarrollo: 380 millones de personas viven en las ciudades y 127 millones en las zonas rurales. Aquéllas tienen enormes rezagos de infraestructura y de base productiva, así como servicios deficientes. La "urbanización de la pobreza" es un fenómeno propio de la región, ya que en Asia y África la mayoría de los pobres aún vive en el campo. Por ello, América Latina necesita identificar las bases para una reforma urbana que otorgue a los gobiernos locales instrumentos para el manejo de sus tierras, la reglamentación de los derechos de los usuarios de servicios públicos y la regularización de asentamientos subnormales.

El combate contra el narcotráfico. El narcotráfico ha corrompido a instituciones indispensables para la seguridad nacional de los países. El incremento de una cultura de la violencia ha alentado la criminalidad, la corrupción y la impunidad, afectando así a las instituciones de seguridad y justicia. Asimismo, ha creado fricciones políticas entre los países porque la sola vía policial no basta para combatir el narcotráfico. Las secuelas de considerar el problema del narcotráfico de manera unilateral y de enfrentarlo con criterios militares ha implicado la posibilidad de una extensión del crimen organizado hasta convertirse en un factor de riesgo para la seguridad de los estados. En las actuales condiciones internacionales y con las premisas que hoy fundamentan la lucha contra el narcotráfico pareciera imposible vencer a la delincuencia.

Esta realidad ha llevado a aceptar internacionalmente las tesis sostenidas durante muchos años por países como Colombia y México sobre la necesidad de reorientar la lucha contra el tráfico de estupefacientes a partir de la aceptación de los "principios de corresponsabilidad" (todos los países productores y consumidores son responsables de la solución del problema) y de "integralidad" (cualquier estrategia debe concentrar su acción en todos los eslabones de la cadena). De no hacerlo, en muy pocos años la comunidad internacional tendrá que hacer frente a nuevas formas de encarar la lucha contra ese grave flagelo.

Pobreza y desempleo. La región ha estado lejos de caracterizarse por altos niveles de integración social, dado que la pobreza y los problemas de desempleo y subempleo, así como la inequitativa distribución del ingreso, han constituido rasgos estructurales de su desempeño. Con este trasfondo de exclusión operan las realidades de la globalización y de la apertura económica, con efectos variados pero que, en el agregado, acentúan las incertidumbres. Las estadísticas de la Organización Mundial de Comercio muestran que sólo 30 países, todos ellos desarrollados, se benefician de la mundialización del comercio mediante la exportación de productos industriales y las utilidades que genera una poderosa red de empresas transnacionales.

En ausencia de políticas públicas que resguarden la igualdad de oportunidades, se deterioran los canales de movilidad social y las oportunidades ocupacionales de la mayoría de la población. De esta forma se gesta la brecha de expectativas frustradas entre las aspiraciones promovidas por los medios de comunicación y las oportunidades reales de acceso a la movilidad social.

La integración social se ve amenazada por la consolidación de núcleos de pobreza, prácticas arraigadas de discriminación étnica y el debilitamiento de la familia como unidad básica de socialización, con alarmantes estadísticas de violencia intrafamiliar e irresponsabilidad paterna. En el caso de las familias pobres, esos comportamientos contribuyen a reproducir el círculo de pobreza, limitando logros educativos y condicionando de manera adversa la posterior inserción laboral.

Los programas para luchar contra la pobreza tienen resultados magros y son cuestionados por su anacrónico sentido asistencial. El crecimiento económico ya no se traduce de manera automática en generación de empleo, a menos que sea a tasas elevadas. Ello plantea un reto regional para buscar las formas para dar un viraje cualitativo y cuantitativo a los problemas de pobreza, desempleo y subempleo, lo que precisa de tasas de crecimiento alto y sostenido de alrededor de 6 a 7 por ciento anual.

Mientras eso no ocurra se agudizarán los problemas. Ejemplos de ello son el estado de sitio en Ecuador en febrero de este año; la crisis sin salida inmediata de Argentina; la complejidad que entraña para el gobierno de Colombia realizar sus tareas económicas y sociales en coexistencia con una guerrilla poderosa y un paramilitarismo depredador; las dificultades de gobernabilidad en Perú, Bolivia y Paraguay, y las amenazas de golpe de estado en Venezuela, entre otros.

Inseguridad ciudadana. Es el correlato de la incapacidad gubernamental de dar solución a los problemas sociales, que se amplían cuando ocurre un crecimiento lento. Para la región significa, además, la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la justicia para crear y fomentar confianza y mejorar el desarrollo profesional de la actuación de la policía y del proceso judicial. La principal responsabilidad en materia de seguridad ciudadana corresponde al Estado. Cuando aparece la inseguridad y su impunidad asociada, el fantasma de la ingobernabilidad se hace presente.

Desarrollo sustentable. El concepto gana importancia ahora que los centros de poder mundial tienden a disminuir al Estado en su papel de regulador del desarrollo y lo remplazan por el mercado. Al mismo tiempo, la planeación gubernamental, en medio de un intencionado desprestigio, es también sustituida por la "mano invisible". Es la miopía de sólo ver a corto plazo. Desarrollo sustentable significa actuar generosamente en favor de las generaciones futuras. Aquí recobra importancia la labor del Estado en términos de calidad, de capacidad de funcionamiento en torno a un proyecto de desarrollo político, económico y social. Recuperar su contenido es ver hacia adelante.

El Estado sigue siendo la única instancia que permite la articulación de consensos nacionales, la distribución de bienes sociales y la regulación de mercados imperfectos, como los latinoamericanos. El desarrollo sustentable se asocia a la democratización del Estado y exige el fortalecimiento de su capacidad política, lo que significa orientar las relaciones entre los partidos políticos y los actores sociales, fortalecer la representatividad y arbitrar los conflictos.

América Latina tiene que crear una nueva red de gobernabilidad que haga viable su proceso de globalización sin afec-

tar las condiciones de estabilidad democrática ni profundizar los niveles actuales de desequilibrio social, sacrificar las identidades culturales o retrasar el proceso de modernización económica y consolidar la estabilidad del crecimiento.

Minorías indígenas y negras. Ser indígena o negro en América Latina y el Caribe es sinónimo de pobreza. La población indígena representa aproximadamente 10% del total de la región, mientras que la de origen africano —incluidos negros y mestizos— bordea 30%. Esos grupos siguen siendo tratados desfavorablemente como minorías, aunque en sus respectivos países no lo sean. Sin embargo, sus demandas se presentan ahora con fuerza, tanto en los países de la región como en los foros internacionales. Algunos grupos indígenas, como los organizados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, México, exigen autonomía territorial y de gobierno, así como mayores niveles de autogestión de recursos. El separatismo es un fantasma que ronda en algunos países.

Pese a esto, la situación actual de los pueblos indígenas no es comparable a la de décadas atrás, cuando muchos de ellos residían en zonas rurales y eran vistos por el Estado como campesinos pobres, lo que cambió durante los años ochenta y noventa. Ahora, si bien subsisten áreas y territorios indígenas en las áreas campesinas, la emigración hacia las ciudades creó nuevas zonas urbanas de indígenas de origen campesino y las descendencias sucesivas de migraciones más antiguas. Lo mismo ocurre con los afroamericanos, quizás con mayor fuerza debido a que no poseían derechos sobre las grandes extensiones territoriales.

La noción de pertenencia a una comunidad y de adaptación a los cambios ha demostrado ser dinámica. La migración ya no es sinónimo de desarraigo cultural o pérdida de identidad. El espacio urbano se ha transformado en el nuevo escenario para el despliegue de la diversidad cultural latinoamericana.

La globalización económica, la universalización de los derechos humanos y el surgimiento de identidades ponen en duda la lógica del Estado-nación tradicional. La homogeneidad y la "unidad nacional" dan paso a la heterogeneidad y a la aceptación de las diferencias. Crece la creencia de que, para superar la pobreza, los estados ya no pueden buscar fórmulas sólo en el plano de las estrategias tradicionales, sino que deben reformular su relación histórica con los pueblos indígenas y afroamericanos y aceptar su condición de estados pluriétnicos.

Gestión macroeconómica rigurosa. Se ha constituido en un elemento clave de la gobernabilidad y la inserción internacional que conduce a un acercamiento entre las posturas económicas de diverso signo, cerrando prácticamente el espacio político al populismo. En una fase de crecimiento lento como la que se vive ahora, la combinación prudente de las políticas fiscales y monetarias exige una sincronía cuidadosa. También es cierto que la recuperación del desarrollo se debe alcanzar mediante un mayor vigor y calidad en las políticas de fomento sectorial y de ampliación y modernización de la infraestructura física, cuidando, al mismo tiempo, la sustentabilidad ambiental. 